

Palabras de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en la Reunión regional de información y diálogo con organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe

“Rumbo a la Cumbre de Los Cabos”

Presidencia mexicana del Grupo de los Veinte (G-20)

Santiago, 2 de mayo de 2012

Mario Leal Campos, Embajador de los Estados Unidos Mexicanos en Chile,

Miguel Díaz Reynoso,
Director General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México,

Gabriel Terres Cruz,
Asesor de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores en representación de la presidencia mexicana del G-20,

Alejandro Hernández Alva,
Director General Adjunto de Evaluación de Proyectos Financieros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México,

Jorge Zermeño González,
Coordinador General de Política Sectorial,
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México,

Amigas y amigos representantes de las organizaciones de la sociedad civil,

Estimados colegas de la CEPAL:

Sean bienvenidos a la CEPAL, la casa de América Latina y el Caribe, siempre dispuesta a servir de escenario para el diálogo y el intercambio entre los actores que construyen, desde sus diferentes roles, el rostro de nuestra región.

Para nosotros constituye un verdadero honor jugar un papel en el esfuerzo de abrir espacios de diálogo entre las voces de las organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas y los

responsables de iniciativas de coordinación política global como el Grupo de los Veinte (G-20), cuya presidencia ha recaído por primera vez en uno de nuestros países, México.

Desde un comienzo, la CEPAL ha jugado un papel activo en este proceso de reflexión sobre la arquitectura financiera internacional. Primero, colaborando con la Comisión de Expertos del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las reformas del sistema monetario y financiero internacional para identificar las áreas de mejoras y las directrices que deberían contemplar dichas reformas. Segundo, sirviendo de foro de discusión de las economías de la región para recoger sus inquietudes y necesidades en este sentido; y tercero, llevando la voz de la región a los distintos foros internacionales que han abordado el tema.

Creemos no solo necesario, sino indispensable, acopiar en iniciativas como las de hoy los insumos que permitan a los jefes de Estado que se reunirán el 18 y 19 de junio en Cabo San Lucas (México) conocer las miradas, los énfasis, las coincidencias y las diferencias que se expresan en una ciudadanía regional que es, en buena hora, más activa, más protagónica y más exigente.

Saludamos con entusiasmo la voluntad y disposición de la presidencia mexicana de impulsar estos encuentros, de reconocerlos como parte esencial de sus responsabilidades en la tarea de coordinar la agenda de una instancia de la relevancia del G-20.

Hace un mes, México solicitó a la CEPAL y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que organizaran en el marco de la reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del BID, en Montevideo, un espacio de diálogo similar para incorporar los puntos de vista de los países de la región que no son miembros del G-20. Los países, especialmente las economías pequeñas y las insulares del Caribe, apreciaron esta oportunidad y propusieron continuar el debate después de Los Cabos y cautelar los impactos de las decisiones del G-20 en los países en desarrollo que

no están representados en ese foro, bajo la presidencia mexicana que se extiende hasta finales de 2012.

En pleno siglo XXI, es cada vez más evidente que la política pública demanda un ejercicio permanente de ajuste en la ecuación Estado-mercado-sociedad. Una ecuación en la que este último vector se ha convertido en una referencia ineludible. Esa gravitación tiene que ver con la centralidad que ha adoptado la igualdad en la aspiración colectiva de desarrollo.

A esa constante, de forma creciente, se ha sumado, sin embargo, una dimensión que apunta a la distribución de recursos en la sociedad, al reconocimiento de que la igualdad política se ve viciada si no se reconoce ni se busca remediar la desigualdad de recursos materiales y simbólicos. Es indispensable establecer derechos y el marco jurídico que los garantice, pero esto es insuficiente si no se aseguran condiciones para la justicia social y estructuras socioeconómicas y políticas que la promuevan.

Habitantes, como somos, de la región más desigual del mundo, no podemos eludir responsabilidades frente a este desafío. En la CEPAL sostenemos frontalmente que no basta crecer para igualar, América Latina y el Caribe han de igualar para crecer.

Pero la desigualdad atraviesa hoy al mundo entero. La crisis de las hipotecas de alto riesgo (*subprime*) de 2008, cuyos efectos siguen hoy vigentes particularmente en el mundo desarrollado, se originó por un crecimiento y acceso sin límites a activos financieros privados altamente riesgosos y tóxicos. Como respuesta, se han efectuado enormes transferencias desde los hogares y el resto de la economía hacia el sector financiero, lo que generó importantes efectos negativos en la distribución del costo de la crisis. En general, las crisis financieras afectan negativamente la distribución del ingreso, en la medida en que los costos de ajustes

suelen recaer de manera significativa en el mercado de trabajo, con pérdidas en el empleo, la protección social y los salarios reales, situación que hoy apreciamos en varios de los países desarrollados del norte.

La crisis financiera de 2008 puso en evidencia un sistema basado en la especulación sin base productiva real y con graves vacíos institucionales.

No solo ha tenido un impacto económico y social significativo en el corto plazo, sino que ha abierto espacios para un profundo debate sobre el devenir de la lógica de acumulación económica, las reglas de funcionamiento del sistema económico mundial, el papel de las políticas públicas y la insuficiencia de una institucionalidad global que no puede responder, regular, alertar ni prevenir, ni mucho menos mitigar.

Esta región, en sus procesos preparatorios para Río+20, ha concluido que la economía verde no resuelve la problemática de fondo, asociada a la urgencia de modificar las formas de producción y consumo.

La crisis financiera y sus impactos sociales, así como la amenaza del cambio climático, ponen un gran signo de interrogación sobre los alcances del paradigma productivo y el paradigma económico que ha predominado en las décadas precedentes.

Desde 2008 han tenido lugar seis cumbres del Grupo de los Veinte. En un comienzo, la agenda se centró básicamente en intentar paliar los efectos de la crisis global y en atacar lo que se considera que fueron sus causas, como expresión de una convergencia más afinada entre Europa y los Estados Unidos que buscaba lograr respuestas simultáneas de estímulos fiscales y financieros.

Hoy no se aprecia esta misma consistencia y estamos enfrentando la crisis con respuestas descoordinadas de consolidación fiscal que nada ayudan al crecimiento y la recuperación.

Más allá de que estos son temas de discusión muy relevantes, no deja de ser cierto que la agenda del G-20 ha ido cobrando con el tiempo una magnitud cada vez mayor en temas que involucran a otros foros globales.

Además de los temas contingentes —y los relativos a los mecanismos para sortear la crisis, los desequilibrios globales y el fortalecimiento del sistema monetario internacional—, los temas del G-20, tras su configuración en Cumbre de Jefes de Estado en Pittsburgh, han ido incorporando sucesivamente: en la República de Corea, una discusión sobre la agenda del desarrollo; en Francia, el tema de seguridad alimentaria, y ahora México adiciona el tema de financiamiento inclusivo y desarrollo sostenible (México se refiere a este tema como crecimiento verde).

El G-20 es un mecanismo que emergió para dar cuenta de los desafíos de corto plazo que surgían de la desestabilización financiera que conocimos en 2008 y 2009. Una respuesta urgente al huracán desatado por lo que Aníbal Pinto describía acertadamente como “el capitalismo financiero salvaje”. Una respuesta que reconocía que los dilemas económicos globales no podían acometerse con la arquitectura de la posguerra y mucho menos con el G-7 o el G-8. Que nuevas voces, nuevas economías debían integrarse a la toma de decisiones. Una respuesta aún insuficiente en la tarea de reconfiguración del pacto económico mundial y cuya eficacia fue desafiada por la crisis europea. Se trata de un multilateralismo de elite poco representativo que debe dar paso a una agenda cuya gobernabilidad respete el multilateralismo real y efectivo.

La CEPAL considera que el G-20 debería evolucionar hacia un Consejo Económico y Social en el marco de las Naciones Unidas, con no más de 27 integrantes que representen a las regiones, al estilo del actual Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (que tiene 54 miembros).

La conjunción de la crisis financiera con la alimentaria y la climática, que tuvo graves efectos para los más vulnerables, nos plantea además dilemas éticos, nos hace pensar que sus efectos serán de carácter estructural y nos obliga a actuar con urgencia. Vivimos momentos de enorme incertidumbre y confusión, pero no por ello el G-20 es el lugar para debatir todos estos temas de desarrollo. Esto debilitaría a las Naciones Unidas. Aun así, estimamos que el G-20 debería poner la igualdad en el centro de sus reflexiones y no solo el rescate del sistema financiero.

Hoy enfrentamos un desempleo de 200 millones de personas, 6 millones más que el año pasado, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La Argentina y el Brasil propusieron incorporar el tema del empleo en el G-20 y tuvieron éxito en las primeras reuniones. Sin embargo, en el debate de hoy no se aborda la urgencia de contar con empleo decente (con derechos) y, en cambio, se propone mayor flexibilidad laboral para resolver el grave problema de la desocupación en el mundo desarrollado.

Y es en este contexto en que transcurrirá la próxima reunión del G-20, en el que prevalece la necesidad de reformar profundamente la arquitectura financiera internacional, pero ya no resuena con la misma urgencia que en 2008.

Creemos en la relevancia de hacer oír este mensaje en el seno del Grupo de los Veinte. Con sus insuficiencias, el G-20 incorpora a varias economías emergentes. De nuestra región participan la Argentina, el Brasil y México, y aunque estos países no necesariamente representan la perspectiva latinoamericana, su inclusión ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el rol que la arquitectura financiera regional debe jugar como complemento de la mundial.

Por esa vía, se abre la oportunidad para dar cuenta del nuevo rol que corresponde a una región que hoy suma alrededor de 770.000 millones de dólares en reservas, que no está en el origen de la crisis que golpea las finanzas globales, que pese a los efectos de esta, mantiene prendidos los motores de su crecimiento. Una región que está repensando esquemas, como la cámara de compensación recíproca de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), para fortalecer transacciones comerciales con monedas locales. Una región que requiere un sistema de seguridad financiera que nos proteja frente a la alta volatilidad. Una región que mantiene el imperativo urgente de solventar las insuficiencias de su estructura productiva y la brecha de capacidades, tanto sociales como ambientales.

Amigas y amigos, México ha propuesto enlazar la reflexión del Grupo de los Veinte hacia asuntos globales clave de presente y futuro: i) la estabilización económica y las reformas estructurales para el crecimiento y el empleo; ii) el fortalecimiento del sistema financiero y el fomento de la inclusión financiera para impulsar el crecimiento económico; iii) la mejora de la arquitectura financiera internacional en un mundo interconectado; iv) el reforzamiento de la seguridad alimentaria y la mitigación de la volatilidad de los precios de las materias primas, y v) la promoción del desarrollo sustentable, el crecimiento verde y la lucha contra el cambio climático.

La presidencia de México en el G-20 planteó entre sus objetivos prioritarios la recuperación de la estabilidad y el crecimiento económico mundial. Ello obliga a subrayar la necesidad de corregir los desequilibrios existentes en la economía global y robustecer las finanzas públicas sin minar las posibilidades de una expansión económica.

La crisis ha obligado a las economías desarrolladas a hacer uso extensivo de una gran gama de instrumentos de política pública para tratar de dinamizar la actividad productiva y generar empleo. Algunos de estos instrumentos se han utilizado tiempo atrás en América Latina y han demostrado su efectividad en momentos difíciles, como los encajes, los límites de cartera, la

administración de flujos de capital y los tipos de cambio, la política de apoyo productivo y la banca de desarrollo.

La firme intervención contracíclica de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y recientemente también del Banco Central Europeo, ha generado una fuerte expansión monetaria mundial que ha mantenido bajas las tasas de interés de los mercados globales. Esta expansión monetaria ha complicado el manejo macroeconómico en los países de América Latina, pues los excedentes de liquidez han generado vastos y volátiles flujos de capital de corto plazo hacia los mercados emergentes. Estos flujos tienden a provocar apreciaciones y volatilidad de las monedas de la región. La volatilidad puede deprimir la inversión en capital físico, mientras que la apreciación puede reorientarla hacia sectores no transables y reducir así las posibilidades de lograr un crecimiento elevado y sostenido de largo plazo. A la vez, estos excedentes de liquidez en un ambiente de bajo crecimiento e incertidumbre inducen al aumento de reservas internacionales y generan crecientes déficits cuasi fiscales, a la vez que presionan al alza de los productos básicos, incluidos los combustibles y los alimentos.

La necesidad de fortalecer la regulación bancaria y avanzar en la adopción de los criterios de Basilea III, en un entorno de fragilidad de la banca europea, podría reducir la disponibilidad de líneas de crédito para el comercio internacional, lo que afectaría adversamente a América Latina. Vale también reflexionar sobre el impacto en economías más pequeñas, pero que han optado por el desarrollo de servicios financieros como parte de sus ventajas competitivas en un mundo globalizado.

Es imperativo reflexionar en conjunto sobre las medidas que deberían adoptar los países de la región y los del G-20 para avanzar coordinadamente en mitigar los riesgos anteriores y cerrar la brecha de desarrollo entre los países.

Dichas medidas incluyen robustecer las finanzas públicas, haciendo más progresiva la estructura de los ingresos tributarios y simplificando su administración, examinando la

efectividad de los incentivos fiscales, evitando sacrificar la inversión pública en momentos de crisis y enfrentando los crecientes gastos de adaptación al cambio climático y de seguridad y justicia ante el embate del crimen organizado. Convendría repensar la idea de un impuesto a las transacciones financieras y cómo administrar los flujos de capital de corto plazo en beneficio del desarrollo. En materia financiera, deberemos construir un marco regulatorio que asuma centralmente el objetivo de inclusión financiera y los aspectos macroprudenciales, y que fortalezca el potencial contracíclico de la política monetaria, además de la fiscal.

Para impulsar el crecimiento y el empleo en el ambiente de incertidumbre actual, al igual que lo han hecho algunos países más desarrollados, debemos asumir con mucho pragmatismo los roles complementarios y potencialmente sinérgicos entre el Estado y el mercado en la economía.

Sobre estas materias trascendentales, México ha querido integrar no solo la voz de las autoridades; ha querido sumar la reflexión de las voces de la sociedad civil de nuestra región.

En síntesis, los ciudadanos reclaman su espacio en el proceso de toma de decisiones que los afectan y plantean la urgente necesidad de definir una nueva relación de poder entre el Estado, la sociedad y el mercado. Un estado eficiente, moderno y ágil que garantice el bienestar, la protección y una distribución justa del ingreso; un mercado dinámico e innovador que responda a los intereses sociales; una sociedad incluyente y solidaria.

Hoy nuestros Estados enfrentan un gran déficit de políticas activas de promoción del desarrollo sostenible, regulación económica, garantía del bienestar y provisión de bienes públicos. El reto es, entonces, colocar al Estado y a lo público en el lugar que le cabe de cara al futuro. Por eso, hoy nos damos cita un grupo de actores principales del desarrollo para avanzar a paso más rápido y decidido, para reorientar nuestra mirada del desarrollo y profundizar los cambios

estructurales que se plantean a raíz del colapso del modelo de autorregulación de los mercados. Y todo ello, con una profunda identidad regional.

México ha querido además hacerlo, ofreciendo a la CEPAL la oportunidad de ser anfitriona. A México, nuestra gratitud por la confianza. A todas y todos ustedes, amigos de la sociedad civil, el testimonio de nuestro respeto por su labor cotidiana, por el compromiso de visibilizar las causas que emergen desde nuestras comunidades, por el papel insustituible que juegan en la construcción de sociedades más justas, igualitarias y armónicas.

Muchas gracias.